



TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN

SALA LABORAL

AUDIENCIA

Medellín, junio 29 de 2022

Radicado: 05001- 31- 05-015-2019-00756-01
Demandante: JORGE HUMBERTO JIMÉNEZ ZULETA
Demandado: COLPENSIONES
Asunto: AUTO DECRETO DE PRUEBAS

La Sala Sexta de decisión, presidida por el magistrado ponente DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN, e integrada por las magistradas MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA Y ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ, procede a emitir sentencia dentro del proceso ordinario laboral de la referencia,

Acreditados los presupuestos procesales y sin que se evidencien causales de nulidad que invaliden lo actuado, se procede a emitir la presente decisión.

ANTECEDENTES

Pretende el actor el reconocimiento de la pensión de vejez exponiendo que acumula los requisitos de causación de la misma en tanto supera los 62 años de edad y la densidad de cotización se satisface si se tiene en cuenta unos ciclos que presentan irregularidades, que corresponden a los años 1971 a 1976 que aduce fueron aportados a través del empleador Finca la Palma y en aquella data fue registrado con su tarjeta de identidad.

Como elementos de prueba, además de las diferentes resoluciones de petición y negación del derecho pensional, enlistó una serie de testigos que pretende sean oídos en el trámite.

Dentro de la diligencia que trata el artículo 77 del CPTSS en la etapa de decreto de pruebas la falladora de instancia negó la práctica de la prueba testimonial al no cumplir con el requisito del artículo 212 del CGP, en tanto no se enunció el lugar de ubicación, como tampoco se refirieron los hechos que pretenden ser demostrados con sus dichos; aunado a que dicha probanza resulta inútil para el tema debatido.

En cuanto a la prueba de oficio a Colpensiones de histórico de cotizaciones indicó que con la contestación de la demanda se adosó el expediente administrativo que contiene el histórico de cotizaciones con los reportes de novedades de los ciclos previos al año 1995.

Inconforme con la decisión fue **recurrida por la activa** refiriendo que la prueba testimonial es conducente y pertinente, destacando que pese a no haberse indicado los hechos que pretenden ser probados con los mismos, esto se deduce del tema litigioso que es la existencia de la prestación del servicio y cotizaciones entre los años 1971 a 1976. Prueba testimonial que también resulta útil en la medida que a través de ella puede generarse convencimiento de lo debatido.

En cuanto al oficio requerido se echa de menos aquella solicitud referente a la información del tiempo de cotizaciones que realizó con tarjeta de identidad, la que no fue adosada con la contestación de la demanda y tiene directa relación con los hechos debatidos.

ALEGATOS

Concedido el término que establece el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022 las partes no presentaron escrito alguno.

CONSIDERACIONES

Atendiendo a las premisas expuestas corresponde a esta corporación resolver las réplicas de la activa referente al decreto de pruebas, asunto que es susceptible

del recurso de apelación tal como lo establece el numeral 4° del artículo 65 del CPTSS, donde la falladora de instancia negó las pruebas testimoniales al hallarlas inocuas de cara los temas debatidos y en cuanto al oficio con destino a Colpensiones indicó que su finalidad se satisfizo con los históricos de cotizaciones adosados con la contestación de la demanda.

Al respecto relevante es indicar que en los términos del artículo 53 de CPTSS modificado por el artículo 8° de la Ley 1149 de 2009 puede el Juez rechazar la práctica de pruebas que estime inconducentes o superfluas en relación con el objeto del pleito. Norma que ha de complementarse con lo reglado por el artículo 168 del CPG que refiere a la posibilidad de rechazar de plano el decreto de pruebas que estime impertinentes, inconducentes, manifiestamente superfluas o inútiles

Análisis que ha de realizarse en el caso concreto en tanto los presupuestos de admisibilidad de la prueba responden a las particularidades de cada reclamación, donde de cara a las pretensiones, la norma aplicable y las reglas de decisión, ha de establecerse la procedencia de la prueba.

Ahora en cuanto a la prueba testimonial, indica el artículo 212 del CGP que dentro de la petición debe indicarse el lugar de ubicación de los deponentes, pero además expresar la finalidad de los mismos, exigencia que no comporta un mero formalismo o capricho del legislador y por el contrario cumple múltiples propósitos en tanto refleja de la parte una estructura organizada de su demanda o defensa, es un ejercicio de lealtad procesal toda vez delimita el ámbito de acción de tal prueba, que permitirá a la parte contraria planear su estrategia de defensa, aunado que al hacer expresos los propósitos de la prueba permite al funcionario judicial realizar el examen de pertinencia, conducencia y utilidad de la prueba.

Por otra parte, es relevante indicar que corresponde a las partes y a sus apoderados obrar con responsabilidad, probidad, buena fe y prestando

colaboración para el desarrollo del trámite. Deberes que se activan de forma concreta en tratándose de las peticiones probatorias, tal como lo advierte el numeral 10 del artículo 78 y el artículo 173 ambos del CGP, que alude al deber de agotar las herramientas administrativas o judiciales para lograr el acopio probatorio previo al inicio de la acción en tanto es posible al funcionario judicial abstenerse de decretar las pruebas que bien pudieron obtenerse directamente.

Con estas premisas se descende al **caso concreto** verificando que el acápite de pruebas no satisface las premisas antes advertidas, en tanto la solicitud de testimonios no informa la ubicación de los llamados a declarar y tampoco justifica la necesidad la prueba, los hechos que pretende demostrar, sin que sea válido omitir tal exigencia pretendiendo que la finalidad de la prueba sea inferida, como tampoco es válido enunciar que con ella se pretende demostrar todos los aspectos debatidos.

Empero con los argumentos expuestos en la sustentación del recurso de apelación se devela que la prueba solicitada busca establecer que entre los años 1971 a 1976 el señor Jiménez Zuleta estuvo vinculado laboralmente y su empleador realizó cotizaciones al sistema, siendo legítimo que la parte acuda a este medio probatorio que en abstracto cumplen con los presupuestos de pertinencia, conducencia y utilidad, siendo entonces del resorte del funcionario judicial una vez practicados y valorados determinar su poder suasorio para establecer los hechos debatidos.

Así la cosas, será revocada la decisión que negó la practica de la prueba, para en su lugar disponer sean recibidos los testigos enlistados por la activa, siendo su responsabilidad lograr la comparecencia a la diligencia en tanto no suministró los datos de ubicación, además que subsiste en la falladora la posibilidad de limitar la recepción de testimonios al hallar suficiencia para el esclarecimiento de los hechos (artículo 212 CGP)

Relativo al oficio con destino a Colpensiones, la parte no demostró que previo a la acción judicial o incluso durante el trámite de este recurso hubiera satisfecho los deberes de lealtad y colaboración, toda vez que la prueba que echa de menos consistente en: “pagos reportados por la empresa FINCA SAN JORGE- FINCA LA PALMA desde 22/1/1971 – 30/8/1976 CON TARJETA DE IDENTIDAD por concepto de DEUDAS O MORAS” no fue solicitada directamente a Colpensiones, teniendo en cuenta que el derecho de petición radicado el 9 de marzo de 2019 no indaga por tal situación en tanto allí se pretende obtener el histórico de cotizaciones y detalles de novedades, empleadores previos al 31 de diciembre de 1994.

En adición tal como lo advirtió la falladora de instancia, Colpensiones con la contestación de la demanda adosó la historia laboral tipo CAN (páginas 116/122 expediente digitalizado) allí se individualizan los diferentes empleadores, ciclos de cotización, salarios base de aportes y novedades tales como ingresos y retiros, desde el 22 de enero de 1971 al 31 de diciembre de 1994, por tanto, allí se da cuenta del interregno por el que indaga la activa, incluyendo aquellos años en que el señor Jiménez Zuleta era menor de edad.

Así las cosas, toda vez que la negación de la prueba de oficio responde a los parámetros contemplados en los artículos 78 y 173 del CGP, aunado a que la pasiva aportó el histórico de cotizaciones que muestra las diferentes novedades desde el año 1971, encuentra esta corporación ajustada a derecho la decisión de la falladora de instancia.

Sin costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, administrando justicia en nombre de la república de Colombia y por autoridad de la ley, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Sexta de decisión laboral decide **REVOCA DE FORMA PARCIAL LA PROVIDENCIA RECURRIDA**, en tanto se accede al decreto de la prueba testimonial enunciada

en el escrito de demanda siendo de responsabilidad de la activa lograr la comparecencia de los declarantes a diligencia, además que subsiste en la falladora la posibilidad de limitar la recepción de testimonios al hallar suficiencia para el esclarecimiento de los hechos (artículo 212 CGP)

En lo demás se confirma la decisión apelada. sin costas en esta instancia

Se ordena la devolución del expediente al Juzgado de origen para la continuación del trámite. Lo resuelto se notifica en estados.

Los Magistrados,


DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN


MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA


ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ

CERTIFICO: Que la anterior providencia fue notificada en Estados publicados por medios digitales el 5 de julio de 2022